

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CUADRAGÉSIMA QUINTA
SESIÓN ORDINARIA 2018

Sesión:	CUADRAGÉSIMA QUINTA ORDINARIA
Fecha:	4 DE DICIEMBRE DE 2018
Hora:	13:00 horas.
Lugar:	Ciudad de México Av. Insurgentes No. 20, Piso 8 Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. Auditorio 3

ACTA DE SESIÓN

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).

Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.

En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A las trece horas con doce minutos del martes cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el auditorio 3 del inmueble ubicado en la Avenida Insurgentes, número 20, Piso 8, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República verificó la asistencia del representante del Órgano Interno de Control y de la Presidenta del Comité de Transparencia, por lo que de conformidad con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República, al haber asistido la mayoría de los integrantes de ese Órgano Colegiado, se da cuenta que hay quórum legal para sesionar.

Del mismo modo, se asienta que se encuentran presentes los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas de los cuales queda evidencia con el registro autógrafo de su firma, en la lista de asistencia de la actual sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

II. Aprobación de Acta de la Sesión inmediata anterior.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de información:

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad de la información requerida:

- A.1. Folio 0001700294218
- A.2. Folio 0001700294618
- A.3. Folio 0001700296818
- A.4. Folio 0001700296918
- A.5. Folio 0001700297018
- A.6. Folio 0001700297118
- A.7. Folio 0001700297218
- A.8. Folio 0001700297318
- A.9. Folio 0001700297418
- A.10. Folio 0001700297518
- A.11. Folio 0001700297618
- A.12. Folio 0001700297718
- A.13. Folio 0001700298018
- A.14. Folio 0001700298218
- A.15. Folio 0001700298318
- A.16. Folio 0001700298418
- A.17. Folio 0001700298518
- A.18. Folio 0001700298618



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

- A.19. Folio 0001700298718
- A.20. Folio 0001700298818
- A.21. Folio 0001700304818
- A.22. Folio 0001700307418
- A.23. Folio 0001700321618
- A.24. Folio 0001700324918
- A.25. Folio 0001700307618

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para proporcionar o pronunciarse por la información requerida:

- B.1. Folio 170060006718 – OADEMASCMP

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

- C.1. Folio 0001700305418
- C.2. Folio 0001700305518
- C.3. Folio 0001700306718
- C.4. Folio 0001700306918
- C.5. Folio 0001700309418
- C.6. Folio 0001700309718
- C.7. Folio 0001700309818
- C.8. Folio 1700800004518 – Mandato para la Administración de Recompensas

D. Cumplimiento a las resoluciones del INAI

- D.1. Folio 0001700215718 – RRA 6632/18

E. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analiza la procedencia o improcedencia, la versión testada de las mismas:

- E.1. Folio 0001700289318 – RRA 1191/18

F. Asuntos Generales.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

ABREVIATURAS

PGR – Procuraduría General de la República.

OP – Oficina del C. Procurador General de la República.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SDHPDSC – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

AIC – Agencia de Investigación Criminal.

OM – Oficialía Mayor.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

FEPADE – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

VG – Visitaduría General.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

ACUERDOS

- I. Aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2018.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de información:
 - A. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

A.1. Folio 0001700294218

Contenido de la Solicitud:

"- Informe el número de elementos de la Procuraduría General de la República, que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, de diciembre de 2012 a la fecha. - Informe las entidades en las cuales, estos elementos de la Procuraduría General de la República, perdieron la vida en cumplimiento de su deber, de diciembre de 2012 a la fecha. - Informe los cargos que tenían los elementos de la Procuraduría General de la República, perdieron la vida en cumplimiento de su deber, de diciembre de 2012 a la fecha. - Informe las edades, sexo y nombres de estos elementos de la Procuraduría General de la República, perdieron la vida en cumplimiento de su deber, de diciembre de 2012 a la fecha. - Informe si las familias de estos elementos, actualmente reciben algún apoyo económico por parte de la institución. - Informe si las familias de estos elementos, actualmente reciben algún apoyo psicológico por parte de la institución."
(Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: COPLADII y OM.

PGR/CT/ACDO/0765/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva respecto a los nombres pertenecientes al personal sustantivo de esta Institución que causaron baja por defunción, con fundamento en la fracción V, artículo 110 de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo que ha causado baja por defunción dentro de esta Institución, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite que terceras personas vinculadas con la delincuencia se alleguen de elementos para identificar a sus familiares o conocidos y, por ende, atentar contra vida, seguridad o salud de éstos, toda vez que las funciones que realizaron dichos funcionarios son estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar cualquier información (nombre) relacionada con personal sustantivo que causó baja por defunción, provocaría un riesgo de perjuicio, en razón que permitiría individualizar a sus familiares o conocidos y, por ende, atentar contra su vida, su seguridad o salud, al momento de que grupos delincuenciales pudieran realizar conductas con el afán de obtener información relacionada con las tareas de investigación y persecución de delitos federales, que realizó dicho personal, mismas que se encuentran vinculadas con buen curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar cualquier dato (nombre) relativo al personal sustantivo que causó baja por defunción dentro de esta Procuraduría, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud de los familiares o conocidos de dicho personal, como bien jurídico tutelado; de ahí que no divulgar dicha información no causa ningún detrimento al derecho de acceso a la información, toda vez que de manera proporcional se pretende garantizar el interés público al reservar datos que atenten contra la vida, seguridad o salud de una persona, además de poner en riesgo la procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.2. Folio 0001700294618

Contenido de la Solicitud:

- Informe el número de elementos de la Procuraduría General de la República, que han sido reportados como desaparecidos, de diciembre de 2012 a la fecha. - Informe el nombre, cargo, edad y sexo de cada uno de estos elementos. Informe la entidad en la cual fueron vistos por última vez, cada uno de estos elementos. Informe cuántos elementos de la PGR reportados como desaparecidos, han sido localizados, de diciembre de 2012 a la fecha. Informe cuántos elementos de la PGR reportados como desaparecidos, fueron encontrados sin vida, de diciembre de 2012 a la fecha..” (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: COPLADII, PFM y OM.

PGR/CT/ACDO/0766/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva respecto a los nombres pertenecientes al personal sustantivo de esta Institución que han sido reportados como desaparecidos, con fundamento en la fracción V, artículo 110 de la Ley en la materia, por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo considerado como desaparecido, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite que terceras personas vinculadas con la delincuencia se alleguen de elementos para identificar a sus familiares o conocidos y, por ende, atentar contra vida, seguridad o salud de éstos, toda vez que las funciones que realizaron dichos funcionarios son estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar cualquier información (nombre) relacionada con personal sustantivo considerado como desaparecido, provocaría un riesgo de perjuicio, en razón que permitiría individualizar a sus familiares o conocidos y, por ende, atentar contra su vida, su seguridad o salud, al momento de que grupos



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

delincuenciales pudieran realizar conductas con el afán de obtener información relacionada con las tareas de investigación y persecución de delitos federales, que realizó dicho personal, mismas que se encuentran vinculadas con buen curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar cualquier dato (nombre) relativo al personal sustantivo considerado como desaparecido, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud de los familiares o conocidos de dicho personal, como bien jurídico tutelado; de ahí que no divulgar dicha información no causa ningún detrimento al derecho de acceso a la información, toda vez que de manera proporcional se pretende garantizar el interés público al reservar datos que atenten contra la vida, seguridad o salud de una persona, además de poner en riesgo la procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.





PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.3. Folio 0001700296818

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Copenhagen dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0767/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.4. Folio 0001700296918

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Don Casiano dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0768/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.

A.5. Folio 0001700297018

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Monoceros dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0769/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.6. Folio 0001700297118

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Scarto dentro de la averiguación previa UEIOPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0770/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIOPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIOPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.7. Folio 0001700297218

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Babieca dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0771/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

A.8. Folio 0001700297318

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Argento dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAf.

PGR/CT/ACDO/0772/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.9. Folio 0001700297418

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Rodrigo DPJ dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0773/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.10. Folio 0001700297518

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Grano de Oro dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0774/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



COMITE DE TRANSPARENCIA

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.11. Folio 0001700297618

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Salvirile dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0775/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.12. Folio 0001700297718

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Salvision dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0776/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.13. Folio 0001700298018

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación DON DANIEL dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0777/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.14. Folio 0001700298218

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Xanthus dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0778/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.

A.15. Folio 0001700298318

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Siete Leguas dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0779/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

A.16. Folio 0001700298418

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo As de Oros dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0780/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.17. Folio 0001700298518

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Amado Daniel dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0781/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



COMITE DE TRANSPARENCIA

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.18. Folio 0001700298618

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Galiceño dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0782/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



COMITE DE TRANSPARENCIA

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.

[illegible]

f



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.19. Folio 0001700298718

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Don Alfonso dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0783/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.20.Folio 0001700298818

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Caballo Genitor dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0784/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.

A.21. Folio 0001700304818

Contenido de la Solicitud:

*"Buenas tardes, de antemano agradezco la información anterior proporcionada y derivado de la misma acudo de la manera más respetuosa solicitando lo siguiente:
(INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA DEL PERIODO QUE COMPRENDE DEL AÑO 2011 AL 2018)*

- 1. Me informen cuántas averiguaciones previas se iniciaron y concluyeron por el delito de revelación de secreto industrial.*
- 2. Me informen cual es el motivo que originó se concluyeran las Averiguaciones previas aperturadas por el delito de revelación de secreto industrial.*
- 3. Me informen de que forma se concluyeron las Averiguaciones Previas aperturadas por el delito de revelación de secreto industrial (mediante sentencia o reserva)*
- 4. Me informen si de las averiguaciones previas iniciadas o concluidas por el delito de revelación de secreto industrial, el denunciante acreditó la existencia y/o propiedad del secreto industrial.*
- 5. Me informen si de las averiguaciones previas iniciadas o concluidas, el denunciante tuvo dificultad de acreditar la existencia y/o propiedad del secreto industrial.*
- 6. Me indiquen (en caso de ser así) de que forma el denunciante acreditó la existencia y/o propiedad del secreto industrial.*
- 7. Me proporcionen algunas sentencias o resoluciones absolutorias o condenatorias derivadas de las Averiguaciones previas aperturadas por el delito de revelación de secreto industrial." (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF.

PGR/CT/ACDO/0785/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de la información requerida en los numerales 4, 5 y 6 de la solicitud como reservada, en virtud de que esa información obra en expedientes de investigación en trámite ante el Ministerio Público de la Federación adscritos a la SEIDF, ello con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de rendir una justificación respecto de la causal de clasificación invocada, se rinde la siguiente prueba de daño:

- I. Al dar a conocer la información solicitada, se expondrían las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

para sustentar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, vulnerando información que por su naturaleza es reservada. Constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite limitaría la capacidad para investigar los delitos y vulneraría el resultado de las investigaciones practicadas por la autoridad competente, ya que bajo ese contexto se puede alertar o poner sobre aviso al inculcado o sus cómplices, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma lo que se traduce en un riesgo identificable.

- II. Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento restricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, con lo que prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.

Es pertinente señalar que dicha reserva respecto a la entrega de la información requerida por el particular, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República radica en implementar acciones para prevenir y perseguir los delitos y por ende, dar información al respecto podrá alertar al o los inculcados o sus cómplices de la investigación.

- III. El reservar la carpeta de investigación, no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública y a la normativa penal, y que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en implementar acciones para la persecución de los delitos orientadas al bienestar general de la sociedad, y no así a un interés particular, por tanto la difusión de información afectaría el ejercicio de las atribuciones de investigaciones del Ministerio Público de la Federación o lo que podría traer consigo la alteración o destrucción de pruebas o concretos objetos del delito.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La clasificación de reserva respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender el interés jurídico tutelado en la causal de clasificación, consistente en la persecución de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para su investigación; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular, en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva de ésta.

Por otro lado, este Órgano Colegiado **confirma** la declaratoria de incompetencia por parte de esta Institución Federal para pronunciarse respecto de algunas sentencias o resoluciones absolutorias o condenatorias derivadas de las averiguaciones previas aperturadas por el delito de revelación de secreto industrial, en términos del artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Y se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular respecto de ese punto, directamente al Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que es la instancia encargada de formular los proyectos de sentencias que recaigan a los expedientes que les sean turnados para tal efecto; por lo tanto, la instancia para conocer de ello y pronunciarse al respecto es la Institución Judicial antes señalada.

A.22. Folio 0001700307418

Contenido de la Solicitud:

"Averiguación o averiguaciones previas sobre el robo al Museo de Antropología en 1985, así como el archivo o los documentos relacionados con (...), cuantas órdenes de aprehensión se giraron, qué juez o jueces conocieron de esas órdenes, así como cuántas se cumplimentaron." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"El caso se conoció como el Robo del Siglo y ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 1985" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, SEIDO, SEIDF, DGCS y UTAG .

PGR/CT/ACDO/0786/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en contra de la persona referida en la primera parte de la solicitud; lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Ello en virtud de que relacionar a una persona o personas físicas identificadas o identificables con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y **sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II

DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. **Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito.** Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. **El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación.** pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO **POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.23. Folio 0001700321618

Contenido de la Solicitud:

“La supuesta detención o encarcelamiento de los señores (...), (...), (...) y (...), miembros de la Sección sindical 22, a consecuencia de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2018 en Nochixtlán, Oaxaca. De manera especial, se solicita información sobre los motivos de su detención o encarcelamiento, así como su situación jurídica actual y el estado que guardan sus carpetas de investigación correspondiente.

• Los motivos que llevaron a la detención y encarcelamiento de la Sra. Elba Esther Gordillo Morales, en 2013, así como su situación jurídica actual.” (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:
UTAG.

PGR/CT/ACDO/0787/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en contra de las personas referidas en la primera parte de la solicitud; lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Ello en virtud de que relacionar a una persona o personas físicas identificadas o identificables con un procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio a priori por parte de la sociedad, por lo que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se muestra a continuación:

TÍTULO CUARTO

INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

“La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y **sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "*Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*", dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II

DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. **Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito.** Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación. pues el artículo 6o. otorga a toda persona el



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

*Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO **POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, **mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.**

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su **honra o reputación.**

3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

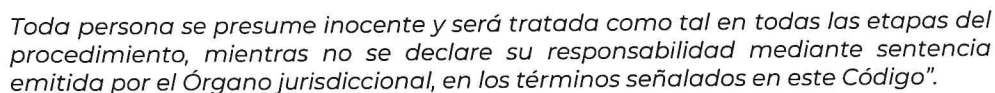
ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia



De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

Por otro parte, este Grupo de Transparencia **confirma** la declaratoria de incompetencia por parte de esta Institución Federal para pronunciarse respecto de la segunda parte de la solicitud; es decir, sobre los motivos que llevaron a la detención y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales, en términos del artículo 65, fracción II de la LFTAI.

Y se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular respecto de ese punto, directamente al Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que es la instancia encargada de formular los proyectos de sentencias que recaigan a los expedientes que les sean turnados para tal efecto; y a esa instancia le fue consignada la pesquisa por la cual se derivó la detención y encarcelamiento de la persona aludida, por lo tanto, ese Órgano Judicial es quien debe pronunciarse al respecto. -----



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.24. Folio 0001700324918

Contenido de la Solicitud:

"(...)

ME DIRIJO A USTED POR ESTE MEDIO CON EL FIN DE SOLICITARLE DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ME SEA REMITIDO VIA OFICIO SI YO EL C. JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ, SU SERVIDOR SE ENCUENTRA RELACIONADO DENTRO DE ALGUNA CARPETA DE INVESTIGACION.

TODA VEZ QUE ME ES INDISPENSABLE DICHA INFORMACION A EFECTO DE REALIZAR TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTRL DE EXPLOSIVOS UBICADA EN AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No. 596, COL. IRRIGACION, EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CD. MX.; ASI COMO LA 1/a ZONA MILITAR (TACUBAYA, CD, MX.) AMBAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0788/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar si existe o no alguna línea de investigación en la que el solicitante aparezca como indiciado; de conformidad con el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

Al efecto se proporciona la correspondiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información petitionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, **se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.** Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. **EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL.** El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que **en la etapa de investigación inicial**, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o **cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista;** por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que **será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación.** De esta manera, **el derecho de acceso a la carpeta** de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho **opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial.** Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 126/2017. 1 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes Calderón. Secretaria: Yoalli Trinidad Montes Ortega.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I,



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. **De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó** algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

A.25. Folio 0001700307618

Contenido de la Solicitud:

"Por medio de la presente plataforma de acceso a la información me dirijo a solicitar de la manera más atenta se me informe si esa autoridad fue notificada de algún medio de impugnación presentado en relación con el aseguramiento ministerial de la embarcación Island Pioneer dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014. En caso afirmativo, pido se me indique el número de expediente, así como el nombre de la autoridad que conoció del mismo y el sentido de la resolución." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDO y OP - UEAF.

PGR/CT/ACDO/0789/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** como información reservada la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 que está integrando el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, así como cualquier documento inmerso en la misma, en términos del artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de brindar una justificación de la causal de clasificación aludida, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014, limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información contenida en la averiguación previa anteriormente citada, al encontrarse en trámite vulneraría el resultado de las posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente pues se alertaría y/o pondría en aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien provocaría alteración o destrucción de los objetos que se encuentren relacionados con la investigación o realizarían cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El dar a conocer la información referente a la averiguación previa mencionada en su requerimiento, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que atienden a la protección de un

interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Procuraduría radica en implementar acciones para prevenir los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues dicha información pondría en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce este Ministerio Público de la Federación.

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para proporcionar o pronunciarse por la información requerida:

B.1. Folio 1700600006718 - Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Contenido de la Solicitud:

"Número de asuntos iniciados en el sistema penal acusatorio del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

En cuántos de esos asuntos se dio el criterio de oportunidad

En cuántos se llegó a un acuerdo.

En cuántos se llegó a la suspensión condicional del proceso.

En cuántos se llegó a un procedimiento abreviado

Cuántos llegaron a juicio oral y cuál fue el sentido de la sentencia." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a:
OP - OADEMASCMP.

PGR/CT/ACDO/0790/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la declaratoria de incompetencia por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para proporcionar información relativa a:

- ◆ Número de asuntos iniciados en el sistema penal acusatorio del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.
- ◆ En cuántos de esos asuntos se dio el criterio de oportunidad
- ◆ En cuántos se llegó a la suspensión condicional del proceso.
- ◆ En cuántos se llegó a un procedimiento abreviado
- ◆ Cuántos llegaron a juicio oral y cuál fue el sentido de la sentencia

Lo anterior, en términos del artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Y se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular respecto de los puntos aludidos, directamente a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación, instancias que podrían proporcionar información interés del solicitante.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:

PGR/CT/ACDO/0791/2018: Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la información requerida:

C.1. Folio 0001700305418

C.2. Folio 0001700305518

C.3. Folio 0001700306718

C.4. Folio 0001700306918

C.5. Folio 0001700309418

C.6. Folio 0001700309718

C.7. Folio 0001700309818

C.8. Folio 1700800004518 – Mandato para la Administración de Recompensas

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. -----

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



COMITE DE TRANSPARENCIA

D. Cumplimiento a las resoluciones del INAI

D.1. 0001700215718 – RRA 6632/18

Las resoluciones adoptadas por unanimidad de los miembros del Comité se encuentran al final de la presente acta.

[illegible]



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

E. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analiza la procedencia, improcedencia y/o versión testada de las mismas:

E.1. Folio 0001700289318 – RRD 1191/18

Contenido de la Solicitud:

"me permito solicitar mis comprobantes fiscales que de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en relación al 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debieron haber expedido, en virtud de que aplicaron mi baja en el sistema de nomina, del ejercicio fiscal de 2017, del sistema de administración de Recursos Humanos en la quincena de 15 de julio de 2017., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM.

Antecedentes

En respuesta inicial, se le informó al peticionario que la Dirección General de Recursos Humanos adscrita a la Oficialía Mayor no localizó ningún comprobante fiscal para el año 2017, toda vez que, en el sistema de nómina institucional se tiene registrado que la baja por separación del solicitante fue el día 8 de mayo de 2013.

No obstante , el solicitante se inconformó con la respuesta emitida por esta Institución Federal, motivo por el cual presentó recurso de revisión ante el Órgano Garante en materia de Transparencia, en los siguientes términos:

"la información falsa que me proporciono el Director General de Recursos Humanos y Organización, al señalar que en el sistema de nomina se tiene registrada que la baja por separación fue el día 8 de mayo de 2013 sin embargo, en la consulta de movimientos de personal (Kardex) (anexo) se constata de manera fehaciente que la quincena en que se aplico mi baja en el sistema de nomina lo fue el 15 de julio de 2017, por lo que si debe existir un comprobante fiscal del año 2017 y la quincena de aplicación de mi baja por separación fue en la nomina del año fiscal 2017, como se constata en el documento publico denominado movimientos del personal (KARDEX)."

Así las cosas, a fin de solventar el agravio del particular, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud nuevamente para su atención a la Oficialía Mayor para que emitiera lo conducente respecto de lo solicitado y los agravios expuestos por el particular.

Ante tal situación, la citada unidad administrativa comunicó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de sus archivos físicos y electrónicos, indicó lo siguiente:

Que de conformidad con las facultades conferidas a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y de la búsqueda realizada en la nómina contenida en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH) de esta Procuraduría, así como del análisis a las constancias que obran en el expediente aperturado a nombre del peticionario, se tuvo la convicción de que los documentos solicitados por el citado ex servidor público no eran existentes.

Lo anterior es así, dado que el solicitante fue dado de baja de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento a la resolución de 14 de noviembre de 2011, dictada por el Consejo de Profesionalización de esta Institución, en la que se determinó separarlo del cargo de Agente de la Policía Federal Investigadora, en funciones de Policía Federal Ministerial, con efectos a partir del 14 de noviembre de 2011, resolución que fue impugnada por el citado ex servidor público mediante juicio de amparo, y en donde por sentencia de 31 de octubre de 2012, se le concedió la protección de la justicia federal.

Sin embargo, en contra de la sentencia citada, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Procuraduría General de la República, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito competente, y que por ejecutoria de 30 de enero de 2013 resolvió confirmar la sentencia recurrida, otorgándole la protección de la justicia federal PARA EL EFECTO DE QUE EL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DEJARA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2011, Y EMITIERA UNA NUEVA ATENDIENDO LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS PLANTEADAS POR EL CITADO EX SERVIDOR PÚBLICO, Y NO ASÍ PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LO REINSTALARA EN SU CARGO Y REALIZARA PAGO ALGUNO A SU FAVOR.

Circunstancia que por resolución de 24 de abril de 2013, el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, dio cumplimiento a la sentencia antes citada, así como a la ejecutoria de 30 de enero de 2013, determinando separar al particular del cargo de Agente de la Policía Federal Investigadora, en funciones de Policía Federal Ministerial, con efectos a partir del 8 de mayo de 2013.

Resolución que si bien el citado ex servidor público impugnó por juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que por resolución de 10 de marzo de 2014, ésta reconoció la validez de la resolución impugnada, y por sentencia de 18 de junio de 2014, negó la protección de la justicia federal al requirente.

Inconforme con el fallo anterior, el particular interpuso recurso de revisión de amparo, el cual por auto de 10 de julio de 2014, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

Primer Circuito, ordenó remitir a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien por acuerdo de 15 de octubre de 2014, desechó el recurso por improcedente.

De lo anterior, se puede advertir que al no tener el requirente derecho a que se realice pago alguno posterior al 14 de noviembre de 2011, por parte de la Procuraduría General de la República, es por lo que las documentales solicitadas en la solicitud de datos personales con número de folio 0001700289318, confirman la inexistencia de las mismas en los archivos que obran en la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, por lo que la declaración de su inexistencia se tiene de conformidad con lo dispuesto en el criterio 07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se describe a continuación:

CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.

Determinación del Comité de Transparencia

A efectos de dar certeza tanto al solicitante, así como al Instituto Autonomo de Transparencia y sobreseer el presente recurso de revisión en materia de datos personales, este Órgano Colegiado resuelve lo siguiente:

PGR/CT/ACDO/0792/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos **84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo** de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión. de Sujetos Obligados (LGPDPPO), que citan:

Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, **el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:**

[...]

III. **Confirmar, modificar o revocar** las determinaciones en las que se declare **la inexistencia de los datos personales**, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;

...



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**

Artículo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable competente.

En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular.

El Comité de Transparencia por unanimidad, determina **modificar** la fundamentación legal aludida por la Oficialía Mayor, a fin de que se confirme la inexistencia del documento al que desea tener acceso el particular donde señala obran sus datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo **55, fracción II** de la LGPDPSO, mismo que para su observancia se transcribe a continuación:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

- I. Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;
- II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;**
- III. Cuando exista un impedimento legal;
- IV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
- V. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
- VI. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;
- VII. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;
- VIII. Cuando el responsable no sea competente;
- IX. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular;
- X. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular;
- XI. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, o
- XII. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.

Ello en virtud, de que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de la OM, no se encontró registro del documento al que desea tener acceso el particular conforme a los antecedentes expuestos con anterioridad.



PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

Siendo las 13:56 horas del mismo día, se dio por terminada la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por duplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



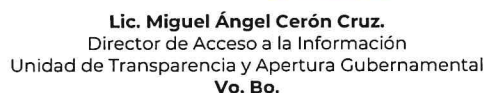
Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

D. Cumplimiento a las resoluciones del INAI

D.1. Folio 0001700215718 – RRA 6632/18

Descripción clara de la solicitud de información:

"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. Ordenado por Número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno de los MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, en posesión del sujeto obligado. a. Nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente (permisos informáticos, credenciales administrativas, privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, administración y control de la configuración de cada equipo. b. Tipo de contratación, empleo, cargo o comisión que desempeñan las personas que resulten del inciso a. c. Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas en inglés Internet protocol) privada en la red (de forma manual o por medio del Protocolo de Configuración Dinámica de Host DHCP, por sus siglas en inglés Dynamic Host Configuration Protocol). d. Domicilio actual en donde se encuentra físicamente cada equipo." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que la información requerida se encuentra clasificada como reservada por un periodo de cinco años, ya que implicaría comprometer la seguridad nacional y pública de la Federación, al poner en peligro las funciones sustantivas de esta Procuraduría General de la República.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracciones I, V y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los numerales Décimo séptimo, Décimo octavo, Vigésimo tercero y Vigésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Inconforme con la respuesta inicial, el particular recurrió la respuesta de esta Procuraduría, arguyendo que:

"[...]"

AGRAVIO PRIMERO.- Violación a la garantía de máxima publicidad de la información. [...]"

AGRAVIO SEGUNDO.- Falta de notificación de la Resolución del Comité de Transparencia, por la cual se clasificó la información requerida.

"[...]"

PUNTOS PETITORIOS

Por lo antes expuesto y fundado atentamente solicito:

I. Tenerme por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso.

II. Tenerme por señalado como único y exclusivo medio para recibir notificaciones el correo electrónico indicado.

III. Aplicar la suplencia de la queja al presente recurso.

IV. Revocar o en su caso modificar la respuesta del sujeto obligado, con la finalidad de que se me entregue la información pública solicitada, conforme a los términos y criterios precisados originalmente; y en el supuesto de no poderse entregar bajo la modalidad de entrega elegida, manifiesto conformidad para que se realice vía correo electrónico señalado en la presente." (Sic.)

Fiablemente, el Pleno del INAI tras analizar el caso, determinó lo siguiente:

"CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente **MODIFICAR** la respuesta proporcionada por la Procuraduría General de la República, y se le instruye a efecto de que:

- **Proporcione al hoy recurrente, el tipo de contratación, tipo de empleo, tipo de cargo o comisión de los servidores públicos que posean las personas que cuentan con las contraseñas administrativas de los equipos de cómputo en posesión de la Procuraduría General de la República.**
- Por conducto de su Comité de Transparencia **emita una nueva acta, en la que de manera fundada y motivada, confirme la reserva -por cinco años- de la información, con fundamento en el artículo 110, fracciones I y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente respecto de los siguientes puntos:**
 - Ordenado por número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno de los MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, en posesión del sujeto obligado, la información que se describe:
 - Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas en inglés Internet protocol) privada en la red (de forma manual o por medio del Protocolo de Configuración Dinámica de Host DHCP, por sus siglas en inglés Dynamic Host Configuration Protocol).
 - Domicilio actual en donde se encuentra físicamente cada equipo.

Asimismo, en dicha acta deberá confirmar la reserva -por cinco años- de la siguiente información, con fundamento en el artículo 110, fracción V, de la Ley de la materia antes referida:

- **Nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente** (permisos informáticos, credenciales administrativas, privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, administración y control de la configuración de cada equipo. [...]" (Sic.)

Por lo anterior expuesto y notificada la resolución a la Unidad de Transparencia, ésta turnó para su atención la instrucción aludida a la Oficialía Mayor (OM), misma que informó lo que a continuación se indica por lo que hace al párrafo segundo de la cuarta decisión aludida por el INAI:

- Que los servidores públicos de esta Institución que administran y supervisan el Servicio tercerizado para realizar la configuración de los equipos que son señalados en la solicitud que nos ocupa, es personal contratado bajo el esquema de "Confianza" y que pertenecen a la estructura autorizada de la DGTIC con cargos de Director de Área, Subdirector de Área y Jefe de Departamento.

Así las cosas y en acatamiento a lo instruido en el resolutivo del INAI, en el cual también instruye se emita una nueva acta, en la que, de manera fundada y motivada, confirme la reserva -por cinco años- de la información, con fundamento en el artículo 110, fracciones I, V y VII de la LFTAIP, es que este Comité de Transparencia determina:

Determinación de Comité de Transparencia

RESOLUCIÓN PGR/CT/0081/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II y 169, el Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva por un periodo de cinco años, de la siguiente información con fundamento en los siguientes preceptos legales:

Artículo 110, fracciones I y VII de la LFTAIP:

- ♦ Ordenado por número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno de los MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, en posesión del sujeto obligado, la información que se describe:
- ♦ Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas en inglés Internet protocol) privada en la red (de forma manual o por medio del Protocolo de Configuración Dinámica de Host DHCP, por sus siglas en inglés Dynamic Host Configuration Protocol).
- ♦ Domicilio actual en donde se encuentra físicamente cada equipo.

Artículo 110, fracción V de la LFTAIP:

- ♦ Nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente (permisos informáticos, credenciales administrativas, privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, administración y control de la configuración de cada equipo.

Por lo anterior, a fin de otorgar una justificación respecto de las causales de clasificación de reserva citadas, se formulan las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:



- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que de difundirse información sobre el número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno de los modems, routers o puntos de acceso inalámbricos, en posesión de este sujeto obligado, así como la forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP privada en la red, y domicilio actual en donde se encuentra físicamente cada equipo, constituye un riesgo o amenaza a la seguridad pública y seguridad nacional; pues se trata de información que revelaría datos concernientes a las especificaciones técnicas de la infraestructura tecnológica e informática de esta institución, como son los equipos de cómputo, módems, routers y puntos de acceso inalámbrico, que se requieren para el desarrollo y consulta de la información relacionada con la generación de inteligencia para la seguridad pública.

Para entender la naturaleza de seguridad pública de la información que es generada, procesada, almacenada y transferida en los equipos y redes de comunicaciones de la Institución; es necesario entender la naturaleza de las atribuciones conferidas a la Procuraduría General de la República en materia de Seguridad Pública.

De conformidad a las atribuciones establecidas en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, su Manual de Organización General los artículos 5, 12, 50, 51 y correlativos de la Ley de Seguridad Nacional; así como los artículos 10, 12, 23, 25 y correlativos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Procuraduría General de la República es la responsable de la investigación y persecución de los delitos del orden federal, entre ellos el de rebelión, terrorismo, tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y otros que transgreden gravemente la seguridad nacional; y en cumplimiento de dichas funciones realiza tareas de diversa naturaleza como lo son: la realización de aprehensiones, cateos, detenciones, impedir que se consumen delitos, inspecciones, actos de investigación, generación de inteligencia sobre la identificación, modos de operación, y estructura de la delincuencia organizada, aplicar técnicas de investigación policial para la obtención de pruebas para la acreditación del cuerpo del delito y la probable culpabilidad del inculcado, acciones de seguridad y protección a personas, integración de carpetas de investigación, realización de dictámenes, peritajes, entre otras.

Estas actividades, tanto administrativa como sustantiva, requieren de la generación, tratamiento, procesamiento, transmisión y resguardo de los equipos y redes de comunicaciones de esta Institución, mismos que están sujetos a políticas generales descritas en el documento denominado Lineamientos para la Asignación y Uso de los Bienes y Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; que tienen por objeto garantizar la seguridad y disponibilidad de la información reservada y confidencial que conciernen únicamente a los servidores públicos de la Institución que lo requieren en el ejercicio de sus atribuciones.

Brindar la información requerida incentivaría los ataques informáticos de los diversos sistemas de generación de inteligencia y contrainteligencia; mismos que

comprometerían la integridad y reserva de la información que se resguarda en dichos equipos y redes informáticas; situación que traería un perjuicio irreparable en las actividades señaladas con antelación.

- II. El divulgar la información supone un perjuicio que supera el interés público general de conocer la información requerida, ya que su difusión permitiría que las organizaciones criminales utilizaran dicha información, vulnerando así la capacidad de reacción de la Institución, para dar respuesta y atención de las investigaciones y combate a la delincuencia organizada que lleva a cabo esta Procuraduría, ya que se estaría proporcionando datos que permitirían identificar especificaciones técnicas de los equipos de cómputo y redes de comunicaciones, que son utilizados para el almacenamiento, clasificación y administración de información de inteligencia y contrainteligencia que se genera en esta Procuraduría, para la investigación y persecución de los delitos en el orden federal.
- III. La presente clasificación se adecúa al principio de proporcionalidad, toda vez que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de este sujeto obligado en materia de seguridad pública y seguridad nacional, ya que obstaculizaría las funciones del Ministerio Público de la Federación; es decir, la investigación y persecución de delitos federales.

Artículo 110, fracción V:

- I. Es un riesgo real, identificable y demostrable proporcionar la información solicitada sobre el personal que administra información altamente sensible, considerando que las credenciales o contraseñas harían factible el acceso a equipos, así como la instalación de software malicioso o modificación de privilegios que pueden suponer mayor vulnerabilidad a intrusiones cibernéticas.

Al revelar información sobre los mismos les haría identificables y por tanto vulnerables a contactos, amenazas, extorciones y ataques con el objeto de obtener las contraseñas, o coaccionarles para la realización de actividades indebidas para la seguridad informática; poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad física, así como la de sus familiares; situación que supone una violación a su derecho humano a la vida y la salud; así como la de los demás servidores públicos de la Institución al quedar expuesta su información.

- II. El perjuicio de dar a conocer la información solicitada, supera el interés de que se difunda; toda vez que la vida y la salud son el derecho humano más valioso y pilar de todos los demás; y máxime considerando que el beneficio del particular únicamente se limitaría a conocer información que además de ser de naturaleza reservada, no supera el valor de la vida y salud de los servidores públicos que resguardan información altamente sensible.
- III. Resulta necesario reservar los nombres de las personas físicas que cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente para el manejo, administración y control

de la configuración de cada equipo, sin que ello signifique un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que la divulgación de su contenido produciría un daño mayor en detrimento del servidor público o de su familia; toda vez que se revelarían datos que pudieran ser aprovechados para amedrentar a dichas personas.

Artículo 110, fracción VII:

- I. Proporcionar la información requerida representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que se haría pública información que contiene especificaciones técnicas de los equipos que son utilizados en el direccionamiento del flujo de la información, así como de los puertos de red que se encuentran abiertos y de los programas informáticos que se aplican en la Institución, para la administración de información que se genera de manera sustancial para la investigación y persecución de los delitos en el orden federal, que llevan a cabo de forma esencial los agentes del Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de delitos federales, a través de la integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación, cuya información de caer en manos de los integrantes de los grupos criminales, sería utilizada para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsables de la comisión de un ilícito del orden federal, obstruyendo la prevención o persecución de los delitos que son competencia de esta Procuraduría.
- II. Difundir la información requerida, superaría el interés público general, considerando que de acuerdo a las funciones que le corresponden a esta Procuraduría, tienen como fin el interés público general, y divulgar la información requerida supera ese interés, ya que provocaría un riesgo de perjuicio pues se estarían proporcionando elementos que permitirían identificar la infraestructura tecnológica e informática que se utiliza en la Institución como son los equipos de cómputo, lo cual afectaría el desarrollo y el resultado de las investigaciones que realizan los agentes del Ministerio Público Federal, peritos y los policías ministeriales; al hacer públicos datos e información que limitaría la capacidad de esta autoridad para evitar la comisión de delitos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar la información requerida, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los Sujetos Obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones previstas en la normativa en la materia, ya que el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, que en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. En tal virtud, es de señalarse que el interés público general se coloca por encima de un interés particular, en razón de que la naturaleza de la información reservada, resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación invocada consistente en la prevención y persecución de delitos federales.

La presente resolución forma parte del Acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República celebrada el 4 de diciembre del 2018. Al efecto, se elabora por duplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.